

ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DOCTOR MISAEI PASTRANA BORRERO EN EL AÑO NUEVO DE 1972

Ha sido este que hoy termina un año de paradojas. En medio de grandes dificultades y de hondos conflictos el país mostró la fuerza de sus instituciones y se ha consolidado la estabilidad nacional. La subversión trató en su momento de hacerse presente con audaz simultaneidad en el campo social, político y económico, pero se estrelló y se disolvió contra el muro de una autoridad resuelta a no dejar sucumbir el orden en la anarquía. Un paro obrero injustificado, fenómeno que el país, por lo demás, venía registrando periódicamente en los últimos años, fracasó ante la inequívoca decisión del gobierno de no transigir con el desorden y gracias a la madurez de unas clases obreras conscientes de sus responsabilidades y deberes. A través del diálogo amplio y comprensivo se firmaron, en cambio, en el curso de este período cerca de 400 convenciones colectivas y pactos laborales que mejoraron las condiciones de los trabajadores y despejaron los horizontes de la firme paz social que hoy disfruta la nación.

Las invasiones agrarias se multiplicaron a lo largo y ancho de nuestro territorio, instigadas y dirigidas en medio de una agitación tendiente a aprovechar las expectativas creadas por la miseria rural y el anhelo de tierra que alimenta a nuestros campesinos desposeídos. Pero la pronta acción del Estado superó sin necesidad del uso extremo de la fuerza esta tensa situación, y llevó al convencimiento de los labriegos sin tierra que no es a través de las vías de hecho como se resuelve el problema del campo y que no hay título más precario que el que puede surgir de la violencia.

El inconformismo universitario se manifestó con caracteres de tal naturaleza que en un momento se temió por la suerte misma de nuestras universidades como centros de saber y de cultura. El Gobierno, pacientemente, fue delineando un conjunto de soluciones que sustrajeron finalmente la controversia del ámbito en que se le había querido situar por elementos extraños, convocando a todos los estamentos comprometidos en su suerte en alternativas que abrieran cauces de participación a los mismos y establecieran canales de comunicación para el logro de una universidad moderna, ausente de la anarquía y el

tumulto como método de reivindicación y que responda con autenticidad a las exigencias del pensamiento cultural, científico y tecnológico del mundo del presente.

La violencia armada, que por tantos años ha conmovido al país con sus crueles manifestaciones, se ha extinguido casi totalmente por obra de la vigilante presencia de nuestras Fuerzas Armadas, símbolos de la lealtad al derecho, a la paz y a las instituciones republicanas. Solo permanecen en su tarea destructora grupos aislados y distantes, capaces apenas de producir golpes de sorpresa, actos de publicidad, o de sacrificar en emboscadas ocasionales humildes vidas de campesinos o de servidores del orden, pero su acción no parece representar ningún peligro serio para nuestras cada vez más sólidas estructuras democráticas.

Las expresiones de crímenes, disolución y vicios inherentes al malestar urbano propio de las grandes aglomeraciones, han sufrido también duros golpes gracias a la tarea cumplida por nuestros cuerpos de policía y de seguridad, cada vez más tecnificados en su misión y que tan continuo ejemplo de decisión y de coraje han demostrado en su lucha contra la delincuencia. Extirpar de raíz el crimen, la subversión, los brotes anárquicos, no es posible; pero lo cierto es que el Gobierno ha dado pruebas suficientes de que no está dispuesto a que quede impune el quebrantamiento de la ley. Tal es el caso de los secuestros, crimen de repugnante cobardía, que fácilmente contagia de temor y de angustia a las familias, pero bien podemos afirmar que ningún caso de este tipo de delito ha quedado sin ejemplar sanción y que sus depravados autores purgan en las cárceles largas condenas. El país ha entendido que este no es un gobierno arbitrario pero que es un gobierno de ley y de orden, dispuesto a defender los derechos de cada ciudadano ante el abuso del poder o ante el atropello que por la fuerza o la presión no pocas veces pretende ejercerse por individuos o grupos.

Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir a todos los sectores en los que la opinión pública ha delegado su representación una labor que bien pudiera llamarse de pedagogía política, tendiente a desterrar de las controversias partidistas cualquier

espíritu de retaliación. Desafortunadamente, y aun en personas que tienen una vocería en altas corporaciones, ha aparecido esta nefasta manifestación que peligrosamente puede envenenar de nuevo el alma colombiana. El gobierno no tolerará el menor asomo de este método bárbaro de lucha y en tal empeño confía en la cooperación, sin excepción, de los dirigentes nacionales, ya que nada podría enturbiar más las perspectivas del país que el regreso a estas formas de enfrentamiento, que tanto dolor y tragedias le causaron en el pasado. Es nuestro deber impedir una nueva espiral de odio y de violencia que pueda dividir al pueblo colombiano.

Es incuestionable que con el paso del tiempo, y por factores extraños al mismo gobierno, los problemas tienden a acentuarse y los retos son mayores. Recibimos hoy el tremendo impacto de la acelerada explosión demográfica de la última década, y ello nos exige más aulas para millones de niños en edad escolar, más servicios de salud, más seguridad social, y especialmente comenzamos a sentir la ansiedad por más empleo. El tránsito rural hacia la vida urbana está congestionando nuestras ciudades con suburbios de miseria y obligándonos a inmensas y casi increíbles inversiones. Tenemos el caso de Bogotá, para citar un ejemplo que relleva la dimensión del problema. Acabamos de inaugurar la ampliación de Tibitó y ya tenemos que comenzar la construcción de la represa de Chingaza, con un costo de cerca de 3.000 millones de pesos, para poder abastecer de agua la población del inmediato futuro.

Y nuestros problemas son todavía más complejos porque nos encontramos ante la incógnita de una población joven, en que el 60% es menor de 18 años, generación que si bien ha sido levantada en el ambiente de entendimiento y reconciliación que nos ha ofrecido el Frente Nacional, está alimentada a su vez por una irrefrenable esperanza de mejoramiento social, que nos exige dar respuestas prontas a su dinamismo de cambio si no queremos que se desborde peligrosamente.

No me gusta estar repitiendo el catálogo de las difíciles circunstancias que hemos tenido que afrontar, aunque para sorpresa mía veo que a muchos colombianos les entusiasma más el lenguaje del pesimismo que las palabras de confianza. Pero no podría dejar de resaltar, para explicar algunas situaciones que tantas críticas suscitan, los imprevisibles problemas que afloraron en el campo económico. Un invierno sin precedentes redujo considerablemente la producción de alimentos básicos para el consumo de nuestra población, y la destrucción de vías, especialmente de caminos veredales, impidió frecuente-

mente el acceso de los mismos a los mercados vecinos. La importación de algunos productos y el mejoramiento de los sistemas de distribución de IDEMA han hecho menos grave el impacto de estos hechos. El descenso abrupto de los precios del café, que en este solo año ha implicado para la economía una pérdida no menor a los 2.000 millones de pesos, lógicamente se reflejó sobre el empobrecido ingreso de la mitad de nuestra población rural, que depende del cultivo del grano, y desde luego en menos divisas y recursos para el fisco. La crisis monetaria internacional, con sus secuelas de injusticia, ha originado un mayor deterioro de los términos de intercambio de nuestro comercio externo, y desgraciadamente todo indica que se proyectará en más desajustes para nuestra economía en los meses venideros.

Nos correspondió además poner en movimiento una economía congelada en sus precios. Tal fue el caso del dólar petrolero que desde hacía ocho años no había sido alterado en sus valores de referencia y que significaba para la nación un insólito subsidio al transporte, aun al privado, de cerca de 800 millones de pesos anuales, vena rota que estaba desangrando el organismo del Estado y desviando injustamente recursos indispensables para atender impostergables demandas sociales.

Llegar a una más clara realidad económica, sumado a los factores adversos de la naturaleza y del comercio exterior, necesariamente se ha traducido en unos índices más altos del costo de la vida, pero a los que seguramente también hubiéramos llegado por la escasez causada por el desestímulo de la producción, que ya había comenzado a manifestarse en algunos artículos esenciales.

Cumplidos estos reajustes, indispensables y difíciles, que me atrevo a calificar de valerosos porque recogían un retardo en hacerlos, la batalla del gobierno se cumplirá con idéntica decisión en un ataque frontal contra el incremento en el costo de la vida para defender el salario de nuestras clases más necesitadas. Para ello adelantaremos una estrategia dirigida a una mayor producción en alimentos esenciales; insistiremos en los cambios de las estructuras agrarias para quitar del campo una ya prolongada incertidumbre; estimularemos la producción industrial hacia los consumos populares y ejerceremos con todos los mecanismos al alcance del Estado los controles necesarios para reprimir cualquier brote especulativo. Esta será una meta en cuyo logro comprometeré los organismos del gobierno, y confío en la colaboración ciudadana y en particular de los sectores de la producción.

Me parece interesante poner de presente el inmenso esfuerzo que se ha venido cumpliendo en el área de complementación alimentaria, con una actividad especialmente dirigida a los grupos vulnerables a la desnutrición, como son las madres lactantes y los niños. Es así como en este año dos millones de colombianos han venido siendo atendidos directamente con alimentos suministrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por otras entidades del Gobierno. La población escolar del Distrito Especial de Bogotá en su totalidad está cubierta diariamente con alimentos balanceados y completos. Con el impulso a estos programas venimos cumpliendo uno de los ofrecimientos que insistentemente formulé en la campaña electoral, como fue el de propender por la defensa del niño desde su primera edad para evitar que por falta de una nutrición adecuada se comprometan prematuramente sus capacidades físicas e intelectuales.

Hemos presentado al Congreso y a la consideración del país un Plan de Desarrollo que no mira solamente al crecimiento de la riqueza sino al bienestar del mayor número de colombianos. La experiencia de los años pasados nos ha demostrado que no obstante que las estadísticas registraban cifras de progreso material, lo cierto es que una injusta distribución ha llevado a más tensiones e insatisfacciones y a más desempleo y pobreza colectiva. El Plan, además, de la búsqueda de una sociedad más humana, constituye un gran propósito nacional con miras a establecer prioridades capaces de responder al problema de nuestras ciudades, que sufren el incalculable impacto de la explosión demográfica y del éxodo rural; concentrar la atención en el cambio de unas desuetas estructuras rurales y en el mejoramiento de la productividad agrícola; estimular las exportaciones para absorber más empleo y hacer menos dependiente nuestra economía de la arbitrariedad de los países ricos, y tender a que se realicen menos inversiones de fachada para lograr más inversiones en el hombre, que eleven su dignidad y mejoren la calidad de su vida.

Y buscar también el equilibrio de las regiones, canalizando un esfuerzo mayor hacia la provincia, dotándola de servicios mínimos, para hacer un país más integrado, más coherente, más participante. Tal es el programa de vigorizar las ciudades intermedias, que ya ha sido puesto en ejecución con inversiones y préstamos a numerosos municipios, y que será impulsado en estos meses subsiguientes con la ayuda para obras de infraestructura indispensables, y encauzando con créditos y con estímulos industrias que en ellos originen nueva actividad y

más ocupación. Confiamos en que con el apoyo dado a estos municipios ellos puedan constituirse en escalones de tránsito para la migración campesina y evitar, o al menos retardar, la tendencia que ha mostrado nuestro pueblo a concentrarse únicamente en cuatro ciudades, incapaces también de absorberlo con empleo y servicios y acumulando así en ellas innumerables ansiedades y tensiones.

El país conoce mi lealtad y mi devoción a las instituciones. Obligado a decretar el Estado de Sitio, he hecho de este instrumento un uso discreto y prudente, en forma tal que hasta ahora no ha habido voz alguna, aun de la más acerba oposición, de crítica a la conducta del gobierno en el manejo del régimen de excepción. Pero soy igualmente consciente de que cumplir la Constitución no consiste solamente en el hecho pasivo de no violar sus normas, sino también en saber usar sus poderes y facultades para buscar la salida a las dificultades, lo cual forma parte esencial del mandato de los gobernantes. Cuando se asume la responsabilidad del poder son tan graves los pecados de omisión como los de acción.

Con los partidos tradicionales, que son la historia misma de Colombia, me comprometí a un conjunto de reformas y al aceptar su personería no lo hice para alcanzar un honor sino para cumplir un compromiso. Y por eso quiero ser sincero ante el país al reiterar que, dentro de los límites que la Carta me señala, cuando lo crea necesario, utilizaré los mecanismos que ella misma indica para prevenir o conjurar cualquier perturbación del orden político, social o económico. Ese no es un capricho; es un deber.

Soy fiel a las instituciones, cuya configuración contribuí a crear y de ahí que conozca por percepción directa cual es el alcance de la legalidad del poder. La sabiduría de la Reforma de 1968 consiste en que permite cumplir dentro de sus cláusulas, frente a los agudos fenómenos sociales de los tiempos presentes, lo que se ha llamado una "revolución institucional", que favorece el cambio evitando la violencia.

No podemos seguir girando indefinidamente en torno de unos programas con un consenso de palabras pero con vacilaciones en cuanto a su oportunidad, su contenido y su verdadera proyección. El afán de los pueblos ha dejado de medirse por sus valores económicos para definirse por sus urgencias sociales. En el momento actual el único camino que tiene Colombia es el de unas reformas básicas que coloquen a nuestra sociedad ante los imperativos

de la época presente. Es realizando la reforma agraria, educativa, urbana, del ahorro y del crédito, y no dejando de hacerlas, como interpreto verdaderamente a la coalición que me llevó al gobierno. Si nuestra democracia y nuestros partidos no toman conciencia pronta de los deberes, responsabilidades y compromisos que solemnemente adquirieron con la opinión ciudadana, entonces sí cabrá esperar días más difíciles.

Bien sé que al presentar el cuadro del país en el presente año se me puede decir que, si hemos sorteado con éxito tantas dificultades, no es necesario ni hay por ahora premura en buscar salida para otras situaciones. Hemos ejecutado actos de poder para evitar que las aspiraciones en lugar de legitimarse con el reclamo y con el diálogo se desviarán por los atajos de la violencia y de las vías de hecho. Hemos demostrado que con una autoridad tranquila y serena, sin mayores traumatismos y enfrentamientos, es posible defender la ley y conservar el orden. Pero no se trata tan solo de soluciones de poder sino ante todo de soluciones de justicia, y por eso consideramos inaplazables las reformas enunciadas, para que las gentes comiencen a vislumbrar respuestas más ciertas a sus inquietudes y a sus esperanzas de cambio. No es el momento de imprudencias, anotaba alguien; pero tampoco de indecisiones y demoras, agregaría yo.

El constituyente de 1968 quiso intencionalmente que se presentaran unas elecciones independientes para diputados y concejales, con el propósito de que en estos comicios se separen los intereses regionales y locales de las agudas y transitorias controversias nacionales, y que el elector desprovisto de las pasiones que aquellas originan pudiera más acertadamente escoger las personas para dirigir y orientar los destinos departamentales y municipales con un sentido más cívico que el exclusivamente político. Se buscaba en esta forma que los municipios tuvieran al frente del manejo de las cuestiones municipales verdaderos administradores, dedicados a

pensar más que en las pugnas partidistas en los problemas de sus servicios esenciales, en el mejoramiento de sus ambientes, en la disponibilidad de escuelas, en las indispensables campañas de salud, en una palabra, en el cúmulo de dificultades que constituyen la diaria inquietud de nuestros pueblos. Es posible que las circunstancias especiales de las próximas elecciones impidan cumplir a cabalidad con este propósito, pero considero mi deber pedirles anticipadamente a los colombianos que se detengan a pensar en la suerte de sus municipios, que al fin y al cabo constituyen el marco inmediato de sus vidas, y que reflexionen sobre la experiencia de estos últimos años, en que muchos de ellos han tenido que pagar directamente el costo de unas administraciones dedicadas más a mantener viejos vicios políticos que a la ejecución adecuada de programas. Hay que salvar al municipio, porque este es la válvula que vivifica y fortalece la administración.

En el año que se inicia mañana comienza virtualmente el tránsito del sistema pactado del Frente Nacional hacia nuevas formas jurídicas, institucionales y políticas. Vamos a necesitar más que nunca reflexión, imaginación, comprensión, alta dosis de patriotismo, aligerar el paso. Tenemos que buscar nuevas bases de entendimiento, nuevos esquemas para la concordia, porque fuera de la paz nada será posible edificar en Colombia. Lo que está de por medio, hoy sí se puede decir con Núñez, es la salud de la Patria. Mis votos son porque el país en este nuevo año haga de la paz su voluntad y de la auténtica justicia la convergencia del sentimiento nacional. Oír la voz impaciente de nuestro pueblo, darnos cuenta de que Colombia tiene prisa y que quienes, porque están tranquilos, creen que es hora de esperar, están con los relojes atrasados. Nos lo acaba de decir el Pontífice: "si se quiere la paz hay que trabajar por la justicia". Esa paz dinámica que es el resultado de la verdadera estabilidad en las relaciones sociales, culturales y económicas. Esa paz que confío inspire definitivamente el corazón y el destino de Colombia.